Chile y La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Cumplimiento de sentencias

Raúl F. Campusano Droguett

Profesor de Derecho Internacional Público
Facultad de Derecho, Universidad del Desarrollo
Master of Arts, Universidad de Notre Dame, Estados Unidos
Master en Derecho, Universidad de Leiden, Países Bajos

Macarena Aguayo Vargas

Abogada Universidad del Desarrollo

RESUMEN: Este apunte tiene por finalidad presentar y analizar las obligaciones y tareas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha impuesto al Estado de Chile en las diversas sentencias en que nuestro país ha sido parte. Así, se analiza el cumplimiento de las sentencias Olmedo Bustos y otros v. Chile; Palamara Iribarne vs. Chile; Claude Reyes y otros vs. Chile; Almonacid Arellano y otros vs. Chile; y Atala Riffo y niñas vs. Chile.

1. Introducción

La finalidad de este apunte es presentar y analizar las obligaciones y tareas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos¹ ha impuesto al Estado de Chile

Nota 1: Este texto se basa parcialmente en la tesis para optar al grado de licenciada en ciencias jurídicas y sociales de la autora Macarena Aguayo y que fue dirigida por el autor Raúl F. Campusano.

Nota 2: El autor Raul F. Campusano desea expresar lo siguiente: En el número anterior de *Actualidad Jurídica* (enero 2013) en el artículo "El Aporte del Derecho Blando a la Actividad Minera en el Siglo XXI: Aspectos Sociales y Ambientales" por error del autor unos párrafos del capítulo 3y que proceden de un texto del MMSD, carecen de las comillas propias de las citas. Sin perjuicio de lo anterior, el texto base es mencionado explícitamente en el texto, y aparece en la bibliografía del artículo. El autor informó de esta situación al Director Ejecutivo del MMSD de la época y a las autoridades de la facultad.

¹ La Corte se encuentra establecida en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la que fue adoptada el 22 de noviembre de 1969, en San José de Costa Rica, durante la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron dicha Convención, que entró en vigor el 18 de julio de 1978. Cabe señalar que Chile forma parte del Sistema Interamericano desde 1889, año en que se realizó la Primera Conferencia Internacional Americana, en Washington, D.C. La delegación chilena al firmar la convención dejó la misma sujeta a una posterior aprobación parlamentaria, conforme a la legislación nacional vigente. Siendo finalmente aprobada por el Congreso Nacional el 14 de agosto de 1990 y ratificada el 21 de agosto de 1990, conforme al Artículo 74.2 de la Convención, mediante el depósito

en las diversas sentencias en que nuestro país ha sido parte. La Corte Interamericana, dentro su competencia y en el ejercicio de sus funciones, ha conocido cinco casos contra el Estado de Chile. Un elemento común en dichas sentencias es la decisión de la Corte de declarar que el Estado de Chile violó o incumplió alguno de los derechos y deberes generales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de las partes afectadas en cada caso. En dichos procesos, la Corte requiere a Chile la adopción de todas las medidas necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a lo resuelto en cada una de las sentencias.

El Artículo 68.1 de la Convención dispone que los Estados Partes se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. Además, debe recordarse el principio de derecho internacional *Pacta Sunt Servanda*, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe según lo dispuesto por el Artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. Así, los Estados no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir su responsabilidad internacional. Procede, entonces, analizar el alcance de las sentencias y la obligatoriedad de las mismas.

2. Caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros vs. Chile).

El 3 de septiembre de 1997 se presenta ante la Secretaría de la Comisión Interamericana una denuncia en contra del Estado de Chile, sometida al conocimiento de la Corte Interamericana mediante demanda el 15 de enero de 1999. En ella se invocaron los artículos 50 y 51 de la Convención, como los artículos 32 y siguientes del Reglamento de la Corte. Esto con la finalidad de que la Corte decidiera si hubo violación a la Libertad de Pensamiento y Expresión y a la Libertad de Conciencia y de Religión, establecidas en la Convención. De igual manera se solicitó a la Corte, como consecuencia de las supuestas violaciones antes mencionadas, declarara que Chile incumplió la Obligación de Respetar los Derechos y el Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno, de la

del instrumento de ratificación en la Secretaría General de la OEA, entrando a regir desde dicha fecha. Chile, junto al depósito, realizó una declaración, en la que resaltó el reconocimiento de competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destacando de la misma forma el reconocimiento con carácter de obligatorio y de pleno derecho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención de conformidad a su Artículo 62. Deja constancia que el ejercicio de dicha competencia es conferido a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sean posteriores al 11 de marzo de 1990. De esta manera Chile reconoció competencia contenciosa a la Corte Interamericana. La Convención establece que sus fallos son definitivos e inapelables. En caso de existir desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

misma carta. Según la demanda, dichas violaciones se habrían producido en perjuicio de la sociedad chilena y en particular de los peticionarios, como resultado de "la censura judicial impuesta a la exhibición cinematográfica de la película 'La Última Tentación de Cristo', confirmada por la Excelentísima Corte Suprema de Chile con fecha 17 de junio de 1997".²

Luego de realizado el procedimiento ante la Corte y esta última habiendo examinado los antecedentes puestos a su disposición por las partes involucradas en el proceso, resolvió mediante sentencia de 5 de febrero de 2001: que el Estado de Chile violó el Derecho de la Libertad de Pensamiento y de Expresión, en perjuicio de los peticionarios. No violó el Derecho a la Libertad de Conciencia y de Religión, en perjuicio de los peticionarios. Incumplió los Deberes Generales de Respetar los Derechos y Libertades consagrados en la Convención, y el Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno, en conexión con la violación del Derecho a la Libertad de Pensamiento y de Expresión. La Corte ordenó que el Estado chileno debía modificar su ordenamiento jurídico interno, en un plazo razonable, con el fin de suprimir la censura previa, para permitir la exhibición de la película en cuestión, debiendo además rendir un informe sobre las medidas tomadas a ese respecto, dentro del plazo de 6 meses de notificada la sentencia. Debía pagar la suma de US\$4.290, como reintegro de gastos generados por las gestiones realizadas por las víctimas y representantes en los procesos internos llevados a cabo y en el proceso internacional, los cuales serían pagaderos por conducto de la Comisión Interamericana. La Corte por tanto supervisaría el cumplimiento de la sentencia y sólo después daría por concluido el caso.

La Corte Interamericana, el 28 de noviembre de 2002, emite la Primera Resolución de Cumplimiento de Sentencia, en el ejercicio de su facultad de control. El Estado de Chile presentó una serie de informes, los cuales tenían por finalidad dar cuenta de las medidas adoptadas para dar pronto cumplimiento a lo resuelto por la Corte, así como comunicar el avance de las mismas. Dichos

² La Corte observa la falta de diligencia por parte del Estado durante el proceso respecto de las resoluciones emitidas por la misma Corte, llegando a presentar escritos fuera de los plazos legales, destacando entre ellos el hecho que siendo notificado de la demanda interpuesta en su contra el 27 de enero de 1999, se le informó del plazo para contestar, oponer excepciones preliminares y designar agentes, el cual vencía el 27 de febrero de 1999, pero no fue hasta el 26 de marzo de ese año que el Estado presenta su primer escrito respecto de la contestación, casi un mes después, solicitando en él plazo adicional para realizar su contestación a contar del 27 de marzo. El Estado fue informado que su plazo para contestar se encontraba vencido, y que el mismo para oponer excepciones vencía el 27 de marzo, es decir, al día siguiente de su solicitud, a pesar de ello se le concedió prórroga hasta el 12 de abril de 1999, día en que el Estado manifestó su intención de llegar a un acuerdo, por lo que el plazo se extendió hasta el 24 de abril de 1999. Luego de una serie de escritos presentados extemporáneamente a la Corte, el Estado presenta formalmente la contestación a la demanda recién el 2 de septiembre de ese año. La Corte el 9 de noviembre de 1999 resuelve finalmente rechazar el escrito de contestación por ser manifestamente extemporáneo. Es decir, el Estado de Chile durante el proceso no contó con la contestación de la demanda, trayendo las consecuencias procesales para su defensa que ello implica.

informes fueron presentados en el período comprendido entre el 7 de agosto de 2001 y el 19 de marzo de 2003, siendo estos observados por las víctimas y la Comisión Interamericana, quienes hicieron hincapié en el incumplimiento del punto resolutive N° 4, referente a la modificación del ordenamiento jurídico interno para suprimir la censura cinematográfica previa, permitiendo la exhibición de la película del caso.

En su Primer Informe, de 7 de agosto de 2001, el Estado señala que el Congreso Pleno había aprobado el Proyecto de Reforma Constitucional destinado a consagrar el Derecho a la Libre Creación Artística y eliminar la censura cinematográfica. Informando que el Ejecutivo había enviado al Congreso Nacional un Proyecto de Ley sobre Calificación de la Producción Cinematográfica, el cual se encontraba en su primer trámite constitucional y que el Consejo de Producciones Cinematográfica había comenzado a recalificar algunas producciones cinematográficas anteriormente rechazadas.³ En su Segundo Informe, de 16 de febrero de 2002, el Estado se hace cargo de todos los trámites realizados anteriormente, y de acuerdo a lo solicitado por la Corte, señala que realizaría todas aquellas gestiones pertinentes para convertir en ley a la brevedad posible el Proyecto de Calificación Cinematográfica.

En el Tercer Informe, de 22 de abril de 2002, se indicaron los avances en cuanto a las medidas adoptadas, las cuales fueron observadas por las víctimas, señalando una vez más que no se había dado cumplimiento a ninguno de los presupuestos del numeral 4° de la parte resolutive de la mencionada sentencia, el avance en tal sentido no había sido sustancial, siendo después apoyado tal argumento por la Comisión.

En el Cuarto Informe, de 20 de agosto de 2002, el Estado confirma que el Proyecto de Ley sobre Calificación de Producción Cinematográfica había sido aprobado por el Senado el 10 de julio de 2002, debiendo pasar al siguiente trámite legislativo ante la Cámara de Diputados.⁴

³ Mediante escritos posteriores, tanto los requirentes como la Comisión solicitaron a la Corte que declarara que el Estado no había adoptado las medidas necesarias para modificar el ordenamiento jurídico interno, reiterando lo resuelto por la Corte en su sentencia, pidiendo conjuntamente la adopción de medidas provisionales, las cuales fueron rechazadas por la Corte. El Estado comunicó sobre la publicación en el Diario Oficial de la Reforma Constitucional que eliminó la censura cinematográfica, sustituyéndola por un Sistema de Calificación para la exhibición de la producción de la película del presente caso.

⁴ Los requirentes observaron nuevamente el incumplimiento al punto resolutive N° 4, exponiendo que no se había dado curso a las solicitudes para permitir la exhibición de la película, junto a una excesiva dilación del proyecto de ley mencionado, lo cual agravaba los perjuicios experimentados por las víctimas. Posteriormente fueron aportados los oficios del Congreso Nacional, donde constaba la aprobación a las reformas legislativas en relación a la censura previa. La Corte, después del análisis realizado a los informes presentados y las observaciones, resuelve reiterar al Estado su deber de tomar todas las medidas necesarias para dar efecto y pronto cumplimiento a la sentencia del caso, debiendo éste presentar antes del 30 de marzo de 2003 un nuevo informe, detallando los avances legislativos del proyecto de Ley sobre Calificación de Producción Cinematográfica, pudiendo las partes hacer observaciones al mismo, en el plazo de 2 meses de notificada la resolución.

La Corte emite su Segunda Resolución el 28 de noviembre de 2003, señalando que mediante la resolución de 28 de noviembre de 2002 la Corte había reiterado el deber del Estado de dar cumplimiento a la sentencia. Por ello en el Quinto Informe y su Adicional, el Estado informó que el proyecto de Reforma Constitucional había sido promulgado e incorporado a la Constitución Política el 25 de agosto de 2001, siendo además publicada y entrado en vigencia la Ley N° 19.846 sobre Calificación Cinematográfica. Conjuntamente fue recalificada la cinta "La última tentación de Cristo" siendo exhibida el 11 de marzo de 2003.

Los requirentes señalaron que de acuerdo a la propia Ley N° 19.846, aún faltaba su Reglamento, ya que había transcurrido el plazo para ser dictado. Agregando que el mismo era de especial trascendencia, ya que regulaba y determinaba el contenido de la legislación. Ante lo cual, el Estado confirmó que el mismo había sido aprobado el 11 de julio de 2003, con ello había dado por cumplido lo establecido en el numeral 4° de la sentencia. Los requirentes, dentro del plazo establecido, reconocieron dicho cumplimiento, ya que el Estado había modificado el ordenamiento jurídico interno y permitido la exhibición de la película, siendo apoyados por la Comisión. Finalmente la Corte solicitó información sobre el cumplimiento del numeral 5°, referente a las indemnizaciones decretadas, señalando el Estado de Chile que había dado curso al pago de la suma adeudada y solicitó consecuentemente el archivo de la causa.

La Corte resolvió confirmar el cumplimiento por parte del Estado de Chile de los puntos resolutivos números 4° y 5°, fundado en que efectivamente había dado cumplimiento integral a la sentencia de acuerdo al Artículo 68.1 de la Convención. Por ello dio por terminado el caso, ordenando el archivo del expediente. Notificando de esta resolución a las víctimas, representantes, Comisión y al Estado de Chile. Así comunicó su Resolución a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en el siguiente período ordinario de sesiones.

3. Caso Palamara Iribarne vs. Chile

El 16 de enero de 1996 se presenta ante la Secretaria de la Comisión denuncia en contra del Estado de Chile, sometida por la Comisión al conocimiento de la Corte Interamericana, presentando demanda el 13 de abril de 2004. Ella se encuentra basada en la supuesta prohibición de la publicación del libro del Sr. Palamara Iribarne, el 1 de marzo de 1993, titulado *Ética y Servicios de Inteligencia*, "en el cual abordaba aspectos relacionados con la inteligencia militar y la necesidad de adecuarla a ciertos parámetros éticos". Junto a la presunta incautación de los ejemplares del libro, los originales del texto, un disco que contenía su texto íntegro y la matricería electroestática de la publicación, todo efectuado en la sede de la imprenta donde se publicaba el libro; así como la supuesta eliminación del texto íntegro del libro del disco duro de la computa-

dora personal del autor, que se encontraba en el domicilio del Sr. Palamara, y la incautación de los libros que se encontraban en dicho domicilio⁵.

La Corte determinó que el Estado de Chile debía permitir la publicación del libro en cuestión; restituyendo todo el material del cual fue privado en las incautaciones; correspondiendo entregar al Sr. Palamara una versión electrónica del libro; realizando las publicaciones de la sentencia en el Diario Oficial, en un diario de circulación nacional, como en un sitio web oficial del Estado; dejando sin efecto las sentencias condenatorias en contra del Sr. Palamara, correspondiendo adecuar el derecho interno a los estándares internacionales en materia de Libertad de Pensamiento y de Expresión, así como en la jurisdicción penal militar limitándola al conocimiento de delitos cometidos por funcionarios en servicio activo, garantizando el debido proceso, estableciendo límites a la competencia material y personal de los tribunales militares, evitando que bajo ninguna circunstancia un civil sea sometido a ella. Además de deber pagar al Sr. Palamara la cantidad de US\$ 8.400, por lo que aquel dejó de percibir por el término anticipado de su contrato como empleado civil a contrata con la Armada; US\$ 11.000, por los ingresos dejados de percibir como los gastos realizados por la distribución del libro, US\$ 4.000, compensando los gastos incurridos en los procesos penales militares y los gastos de mudanza a consecuencia de la orden de abandonar su residencia fiscal; US\$30.000 por daño inmaterial; US\$ 4.000 por gastos en la tramitación en procesos nacionales e internacionales, todo pagadero en el plazo de un año.

La Corte dicta la Primera Resolución el 30 de noviembre de 2007. Señalando que cumpliendo lo establecido el Estado presentó una serie de informes entre el 20 de febrero de 2006 y el 12 de noviembre de 2007, los cuales fueron observados por los representantes y la Comisión⁶. Los representantes y la Co-

⁵ Según lo indicado por la Comisión, "el Sr. Palamara, oficial retirado de la Armada, se desempeñaba en el momento de los hechos como funcionario civil de la Armada de Chile en la ciudad de Punta Arenas, lo sometieron a proceso por dos delitos de desobediencia, siendo condenado por ello. Posteriormente dio una conferencia de prensa informando lo sucedido, producto de la cual fue procesado y en definitiva condenado por el delito de desacato". La primera sentencia, de 3 de enero de 1995 de la Corte Marcial de la Armada en la Causa Rol N° 471 lo condenó, por el delito de desacato y mediante las sentencias emitidas por dicha Corte Marcial en la Causa N° 464 el 3 de enero de 1997 y por el Juzgado Naval de Magallanes, el 10 de junio de 1996, por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares, ello a pesar de haber cumplido las penas antes del pronunciamiento de la Corte. Se llevó a cabo el procedimiento ante la Comisión y la Corte Interamericana. La Corte, usando el Principio del Contradictorio y el de la Sana Crítica, valoró los medios de prueba presentados por la Comisión, representantes y el Estado de Chile, resolviendo por sentencia de 22 de noviembre de 2005 que el Estado de Chile violó el Derecho a la Libertad de Pensamiento y Expresión, Derecho de Propiedad Privada, Derecho a las Garantías Judiciales, Derecho a la Protección Judicial, Derecho a la Libertad Personal y a las Garantías Judiciales, en perjuicio del Sr. Palamara. Incumpliendo las Obligaciones Generales de Respetar y Garantizar los Derechos y Libertades; de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.

⁶ Por ello, de conformidad al análisis realizado por la Corte, ella constató que el Estado había dado cumplimiento de forma íntegra a la obligación de publicación del libro del Sr. Palamara, mediante la impresión efectuada en la Imprenta de la Armada de Chile, entregando a la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería 1000 ejemplares, junto a la versión electrónica del libro. También le fue restituido todo el material del que fue privado. Se publicó en el Diario Oficial el 10 de agosto de 2006

misión señalaron que hubo una serie de inconvenientes para acceder a ella, posteriormente este problema fue solucionado y comprobada posteriormente la publicación por parte de la Corte. Se pudo constatar que el Estado de Chile efectivamente había dejado sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias condenatorias, por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares, eliminando los antecedentes penales. De igual manera, había cancelado al Sr. Palamara, las indemnizaciones ordenadas, por la suma total de US\$ 57.400, mediante un cheque emitido por la Tesorería General de la República el 28 de diciembre de 2006.⁷

La Corte emite su Segunda Resolución el 15 de diciembre de 2008, donde consta que el Estado realizó la presentación del informe solicitado, el 30 de mayo de 2008, el cual fue observado por los representantes y la Comisión Interamericana. La Corte, con los nuevos antecedentes expuestos, resolvió convocar al Estado, a los representantes y a la Comisión, a una audiencia privada, celebrada en la Sede de la Corte, el 20 de enero de 2009, en ella se entregó información completa y actualizada por parte del Estado de los puntos pendientes de la sentencia, y se recibieron las observaciones de la Comisión y de los representantes de la víctima.

En la Tercera Resolución de la Corte, de 21 de septiembre de 2009, el Estado informó que existía pleno acuerdo en la derogación de la figura del delito de desacato, ya que restringía el discurso público como el rol de la opinión pública, en una sociedad democrática. Restando únicamente definir la manera de derogación del mismo. Los representantes observaron que se había omitido información respecto al tipo penal de "amenazas", las cuales eran incompatibles con los estándares internacionales en materia de Libertad de Expresión. Por ello solicitaron requerir mayor información sobre las medidas adoptadas para derogar y modificar las normas internas referidas a ambos delitos. Por su

y en el diario de circulación nacional "La Nación" el 7 de agosto de 2006, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de la sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutive de la misma. Si bien se aceptó por la Corte, se hizo presente que la publicación en la sección de "avisos económicos" no era de amplio alcance y la misma publicación se realizó vencido el plazo de 6 meses ordenado en la sentencia. El 28 de septiembre de 2006 se publicó íntegramente la Sentencia en el sitio web oficial del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores sección Derechos Humanos.

⁷ La Sra. Stewart, ex cónyuge del Sr. Palamara, informó a la Corte el 7 de julio de 2007 que si bien el Estado de Chile había abonado las sumas fijadas en la sentencia, el Sr. Palamara se negaba a hacerle entrega del dinero que le correspondía en su calidad de beneficiaria, con motivo del sufragio y compensación de los gastos realizados por ella. Ante lo cual los representantes señalaron que se le abonaría la suma adeudada, en el mes de enero de 2008. La Corte insistió en que es una obligación del Sr. Palamara realizar la entrega del dinero adeudado. La Corte mantuvo abierto el procedimiento de supervisión, solicitando la presentación de información actualizada de los puntos pendientes de cumplimiento en cuanto a las reparaciones ordenadas, la modificación y derogación de la legislación interna, en lo pertinente a la Libertad de Pensamiento y de Expresión, junto a la adecuación del ordenamiento jurídico a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar, garantizando el debido proceso, así como la protección judicial respecto de las actuaciones de las autoridades militares.

parte la Comisión Interamericana destacó la falta de información específica, suficiente y detallada de las medidas comunicadas.⁸

Los representantes observaron que el trabajo de la CERJM había terminado en diciembre de 2008, sin la presentación de ningún proyecto de ley, esto a pesar de haber excedido los plazos otorgados por la Corte para su cumplimiento. En cuanto a los principios, éstos no se referían a la forma de resolución de los conflictos de competencia con los tribunales civiles, así como tampoco a la restricción de los tribunales militares de conocer casos de violaciones de derechos humanos. La Comisión en tanto apreció los avances del Estado.

La Corte valoró los avances en estudio y elaboración de principios orientadores de la reforma castrense, lamentó que se encontraran recién en etapa inicial a 4 años de emitida la sentencia y que aún no hubiesen avances legislativos sustanciales. Señaló, respecto a los cuestionamientos de los principios formulados, la necesidad de que la reforma abarcara los estándares internacionales sobre jurisdicción castrense y la reparación ordenada en sentencia. Solicitó nuevamente un informe estatal al 29 de enero de 2010, debiendo indicar las providencias adoptadas para cumplir las medidas de reparación ordenadas, así como las observaciones por parte de los representantes y la Comisión, en los plazos de dos y cuatro semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción de dicho informe.

Mediante Cuarta Resolución de 1 de julio de 2011, la Corte resolvió acerca del informe presentado por el Estado en febrero de 2010 respecto a la adecuación de su derecho interno, señaló que existía pleno acuerdo en la derogación de las normas incompatibles mediante la presentación de un proyecto en octubre de 2009, retirado el mismo en septiembre de 2010. Señaló que ingresó un nuevo proyecto de ley, el cual incluía la derogación del delito de desacato. Respecto al delito de amenazas, reconoció que padecía de ciertos problemas técnicos, pero que su aplicación era casi nula, justificando su existencia en la protección de la función pública, evitando el entorpecimiento de la democracia mediante amenazas dirigidas a autoridades, impidiendo así que actúen de manera coaccionada.⁹

⁸ La Corte respecto a la información sobre al tipo penal de "desacato" del Artículo 284 del Código de Justicia Militar, resolvió que ella apreciaba la búsqueda de mecanismos de derogación por parte del Estado, pero subrayó que habían transcurrido casi 4 años desde el pronunciamiento de la sentencia sin que se haya informado sobre algún avance sustancial en la adecuación del derecho interno a los estándares internacionales en materia de Libertad de Expresión, y en lo referido a los delitos de amenazas y desacato. El Estado en tanto informó sobre el avance en la tramitación del proyecto de Ley que modificaría la competencia de los tribunales militares y eliminaría la pena de muerte. Además comunicó sobre el establecimiento de una Comisión de Estudios para la Reforma Integral de la Justicia Militar (CERJM), la cual en diciembre de 2008 debía de entregar una propuesta de reforma, incluyendo en ella la modificación del proceso militar basada en diferentes principios y tipos penales militares. Junto con ello, se informó sobre el cronograma de trabajo a seguir y el avance de anteproyecto de reforma para ajustar la legislación castrense.

⁹ Agregado que dichas amenazas no pueden ser consideradas como legítimo ejercicio de la libertad de expresión, por tanto tal delito no tiene relación con dicho derecho. Mantuvo por tanto la figura del

La Comisión observó la relevancia de la tramitación de los proyectos de ley mencionados, y en cuanto al delito de desacato, si bien el Estado había remitido documentación sobre la Ley N° 20.477 promulgada el 30/12/2010, en él no se incluía la reforma al Artículo 284, por tanto no había claridad acerca del trámite concreto para su reforma, observando lo mismo respecto del Artículo 264. Por tanto, a pesar del tiempo transcurrido no había avances sustanciales.

La Corte observó que si bien se realizaron propuestas legislativas, a 6 años de la sentencia los delitos aún se encontraban vigentes. Tampoco se había informado de avances sustanciales sobre la adecuación del derecho interno a los estándares internacionales en materia de Libertad de Expresión, debiendo remitir dicha información en su próximo informe, junto con las observaciones pertinentes de la Comisión y los representantes, debiendo estos últimos además informar respecto de los pagos a favor de la Sra. Stewart, ya que en la resolución de 21 de septiembre de 2009 habían indicado que aún se encontraban en conversaciones con el Sr. Palamara, quien señaló que entregaría dichos pagos, pero a febrero de 2010 la Corte no contaba con la información sobre el cumplimiento de dicha obligación, por ello reiteró la necesidad de la misma. Por tanto, a la fecha de hoy la Corte aún mantiene abierto el caso, hasta que el Estado Chile dé pleno cumplimiento a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de noviembre de 2005.

4 Caso Claude Reyes y otros vs. Chile

El 8 de julio de 2005 se presenta ante la Secretaría de la Comisión Interamericana denuncia contra del Estado de Chile, sometida al conocimiento de la Corte Interamericana mediante demanda el 17 de diciembre de 1998. En ella se invocaron los artículos 50 y 51 de la Convención, como los artículos 32 y siguientes del Reglamento, esto con la finalidad de que la Corte decidiera si hubo violación, por parte del Estado de Chile, de la Libertad de Pensamiento y de Expresión, Derecho a la Protección Judicial, en relación a la Obligación de Respetar los Derechos, Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno de la misma, en perjuicio de los señores Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola y Longton Guerrero.¹⁰

delito de amenazas respecto de integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden. Destacando que la descripción del tipo penal, en cuanto a las circunstancias de comisión, es muy precisa, lo cual evitaría su interpretación. Los representantes observaron que el proyecto que derogaba el delito de desacato fue retirado en septiembre de 2010, por lo que aún se encontraba vigente. Respecto al delito de amenazas, éste conservaba una descripción ambigua, sin delimitación clara de su conducta delictiva.

¹⁰ Los hechos expuestos en la demanda habrían ocurrido entre mayo y agosto de 1998, los cuales dicen relación con la supuesta negativa del Estado a brindar a los peticionarios toda la información requerida del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), en correlación con la empresa forestal Trillium y el Proyecto Río Cóndor. El proyecto se basaba en la deforestación, que se llevaría a cabo en la Decimosegunda Región de Chile, lo cual, según lo señalado por el Estado, colocaría en riesgo el medio

La Corte resolvió que el Estado de Chile era responsable por vulnerar el Derecho a la Libertad de Pensamiento y de Expresión, violar el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de los peticionarios, declarando que la sentencia constituía per se una forma de reparación.

El Estado, en el plazo de 6 meses, debía entregar la información que motivó el caso o en cambio debía adoptar una decisión fundamentada al respecto. Así mismo, en el plazo de seis meses debía publicar una vez en el Diario Oficial y en otro de vasta circulación nacional, los hechos probados, de acuerdo a lo señalado por la Corte. De igual manera, debía adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información bajo su control, garantizando la efectividad de un procedimiento administrativo adecuado, para la tramitación y resolución de las solicitudes de información. Asimismo debía realizar la capacitación a los órganos, autoridades y agentes públicos encargados de atender las solicitudes de acceso a información bajo su control, sobre la normativa que rige este derecho, incorporando los parámetros convencionales que deben respetarse en materia de restricciones y al acceso a dicha información. Debía pagar a los requirentes en el plazo de un año, por costas y gastos en el ámbito judicial interno e internacional, la cantidad total de \$ 10.000.000 que se entregaría en partes iguales a los peticionarios de la presente sentencia.

La Corte verificaría el cumplimiento íntegro de esta sentencia, y daría por concluido el caso, una vez que el Estado cumpliera lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año, contado desde la notificación de esta Sentencia, el Estado debía rendir un informe sobre las medidas adoptadas para realizar su cumplimiento. El Juez Abreu Burelli y la Jueza Medina Quiroga hicieron conocer a la Corte su voto disidente conjunto sobre el punto resolutivo segundo. El juez García Ramírez dio a conocer a la Corte su voto concurrente razonado sobre el mismo punto.

La Primera Resolución sobre el cumplimiento de la sentencia se emite el 2 de mayo de 2008, donde consta que el Estado había presentado una serie de informes entre el 23 de febrero de 2007 y el 2 de enero de 2008, los cuales fueron observados por los representantes y la Comisión en cada caso. La Corte, después de haber realizado el análisis de los antecedentes puestos a su disposición, resolvió declarar cumplidas las medidas de reparación ordenadas, ya que el Estado había entregado toda la información solicitada, mediante reunión realizada el 19 de mayo de 1998 entre las partes y la CIE, donde respondió a las consultas y proporcionó la información disponible y autorizada de entregar de conformidad a sus facultades legales en relación al proyecto Río Cóndor. De

ambiente y frenaría el desarrollo sostenible de Chile. La Comisión indicó que tal negativa se dio sin una justificación legal válida, ello sin proporcionar un recurso judicial efectivo, no aseguró el acceso a la información y a la protección judicial.

igual manera, el Estado había realizado las publicaciones ordenadas en el Diario Oficial y en el diario "La Nación" los días 17 y 22 de enero de 2007 y había pagado los gastos incurridos por los peticionarios en los términos establecidos en la sentencia el 25 de junio de 2007.

La Corte reiteró el deber del Estado de cumplir lo ordenado en lo restante de la sentencia. Así como adoptar medidas para garantizar el debido acceso a la información bajo control del Estado, capacitando a los órganos y funcionarios en dicha área. Ya que si bien valoraba la adopción de la nueva Ley de Acceso a la Información Pública N° 20.285, publicada el 20 de agosto de 2008, que reglamenta la Constitución, señaló que el Estado debía remitir el texto íntegro de ella, así mismo correspondía presentar las observaciones realizadas por los representantes respecto a la ley en cuanto a su Artículo 22 inciso 3°, que dispondría el carácter de secreto o reservado de manera indefinida de ciertos actos y documentos; también de su Artículo 29, que establecería la suspensión de la entrega de información en caso que la autoridad o un tercero afectado reclamara ante la Corte de Apelaciones competente, y del Artículo 1° transitorio de la Ley, el cual presumiría como legítima la legislación sobre secreto y reserva promulgada con anterioridad a la ley. En cuanto a la capacitación de los órganos y funcionarios de dicha área, la Corte apreció las acciones realizadas, requiriendo mayores antecedentes en cuanto al Poder Judicial. Debiendo igualmente referirse a lo observado por los representantes, en relación a revertir la práctica de no respuesta estatal a las solicitudes de acceso a la información pública.

La Corte solicitó al Estado la presentación de un informe a más tardar el 11 de julio de 2008, en el cual debía indicar las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones ordenadas pendientes. Así como las observaciones de la Comisión Interamericana y representante de las víctimas, en el plazo de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción del informe.

La Corte emite una Segunda Resolución el 10 de junio de 2008, convocando al Estado, representantes y Comisión a una Audiencia Privada, celebrada el 14 de agosto de 2008 en la República Oriental del Uruguay, donde se obtuvo información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes y la recepción de las observaciones de la Comisión y representantes. La Corte emite una Tercera Resolución el 24 de noviembre de 2008, donde el Estado informó los avances del cumplimiento de los dos puntos pendientes, respecto de la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar el Derecho de Acceso a la Información bajo el control del Estado, éste informó sobre la promulgación y publicación el 11 y 20 de agosto de 2008 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de la Administración del Estado, destacando su Artículo 10, el cual consagra el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado y establece, entre otros, los principios de: Relevancia, Apertura y Transparencia, Máxima Divulgación,

Facilidad, Oportunidad, Control, Responsabilidad y Gratuidad. Así mismo informó sobre el procedimiento establecido en dicha ley, y el procedimiento para ejercer tal derecho, los recursos disponibles, sobre el Consejo para la Transparencia, su funcionamiento y facultades, por ser la entidad creada por la ley como corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con facultades de protección y promoción del derecho de acceso a la información.¹¹

La Corte apreció la promulgación y publicación de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, que reglamenta el Artículo 8° de la Constitución Política de Chile y establece el procedimiento para garantizar el acceso a la información bajo el control del Estado, información que fue aportada por las partes. El Tribunal por tanto concluyó que el Estado cumplió con la obligación de adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, de acuerdo al deber general de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el Artículo 2° en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación a la obligación de capacitar a los órganos, autoridades y agentes públicos encargados de atender solicitudes de acceso a la información, el Estado informó sobre acciones de capacitación realizadas por la Agencia para la Probidad y la Transparencia, como seminarios y capacitaciones, siendo aprobados recursos para iniciar planes quincenales y anuales, basados en el Manual de Transparencia y Probidad de la Administración del Estado.

Después de haber revisado los antecedentes y las observaciones de las partes, la Corte decidió dar por concluido el caso Claude Reyes y otros, en razón de que el Estado de Chile dio cumplimiento íntegro a lo ordenado en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 19 de septiembre

¹¹ En las observaciones formuladas por los representantes ellos señalaron que el Artículo 22.3 dispone la reserva temporal indefinida de acceso a la información, sobre ciertos supuestos relacionados con la seguridad nacional, lo fundamenta como una medida razonable, ya que cumple con el Principio de Legalidad acorde con la Convención Americana y que persigue un fin legítimo, como lo es la seguridad nacional, siendo la "reserva indefinida" un caso excepcional en la ley. En cuanto al Artículo 29, el cual suspende la entrega de información, en caso de que se recurra una decisión del Consejo para la Transparencia ante la Corte de Apelaciones competente, afirma que dicha medida se relaciona con la protección debida de terceros a quienes la posible entrega de información les podría afectar, ya que si existe un recurso pendiente sobre la procedencia de la entrega de la información solicitada, resulta natural el estado de *statu quo* de ella, hasta que el mismo haya sido decidido. Por último el Artículo 1 transitorio, que presume como legítima la legislación sobre secreto y reserva promulgada con anterioridad a la Ley, se indica que con ello se trata de subsanar un requisito formal de dichas normas de secreto, las cuales no fueron adoptadas con quórum calificado, como se exige desde la reforma constitucional de 2005, no pudiendo derogarse orgánicamente, debiendo por tanto ser visto caso a caso. Los representantes en tanto, consideraron la entrada en vigencia de la Ley como un cambio radical, reiterando sus aprensiones en los Artículos 22.3 y 1 transitorio, debiendo de ser considerado, pero no ser entendido, como una condición de cumplimiento del fallo. Por su parte la Comisión valoró los avances y relaciones entre las partes.

de 2006, ordenando con ello el archivo del expediente. Se comunicó de dicha Resolución a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en su siguiente período ordinario de sesiones por conducto del Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2008.

5. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile

El 15 de septiembre de 1998 se presenta ante la Secretaría de la Comisión Interamericana denuncia contra el Estado de Chile, sometida al conocimiento de la Corte Interamericana por demanda el 11 de julio de 2005. Los hechos expuestos por la Comisión se refieren a la presunta falta de investigación y sanción de los responsables de la ejecución extrajudicial del Sr. Almonacid Arellano, a partir de la aplicación del Decreto Ley N° 2.191, ley de amnistía, adoptada en 1978 en Chile, así como a la falta de reparación adecuada a favor de sus familiares.¹²

¹² El Estado presentó un escrito mediante el cual interpuso excepciones preliminares, contestó la demanda y remitió sus observaciones al escrito de solicitudes y argumentos. La Corte recibió declaraciones de testigos y peritos, citó a una audiencia pública para escuchar sus alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares y eventuales de fondo, resolviendo el rechazo de ellas. Los hechos probados y contextualizados a la época de los mismos señalan que el Sr. Almonacid estaba casado con la Sra. Gómez Olivares, con quien tuvo 3 hijos. Se desempeñaba como profesor de enseñanza básica, militante del partido comunista, era candidato a regidor del mismo partido, secretario provincial de la Central Unitaria de Trabajadores y dirigente gremial del Magisterio. Fue detenido el 16 de septiembre de 1973, en su domicilio, por Carabineros de Chile, quienes le habrían disparado, en presencia de su familia, a la salida de su casa. Falleciendo en el Hospital Regional de Rancagua el 17 de septiembre de 1973. La Corte recibió las declaraciones de testigos y peritos, citó a una audiencia pública donde escuchó los alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares y eventuales de fondo, reparaciones y costas. Señalando al respecto que podía inferir de acuerdo a lo expuesto la existencia de otra objeción como lo es la falta de agotamiento de los recursos internos, si bien el Estado no la interpuso, la Corte igualmente se referiría a ella. En cuanto a la primera excepción de la supuesta incompetencia *ratione temporis* de la Corte para conocer del presente caso. El Estado argumentó que había realizado el depósito del Instrumento de Ratificación de la Convención, reconociéndole competencia a la Corte Interamericana, el 21 de agosto de 1990, por tanto ella dice relación con hechos posteriores a la fecha del depósito o a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990. Mas el delito de homicidio del Sr. Almonacid ocurrió el 17 de septiembre de 1973, por tanto se localiza en la declaración de incompetencia *ratione temporis*, por haber ocurrido antes del 11 de marzo de 1990. Además "la investigación criminal constituye un todo único, continuo y permanente en el tiempo", que "no es susceptible de ser parcializado, dividido o escindido, ni siquiera material o formalmente". Por tanto, ya que por el principio de ejecución de la supuesta violación es anterior al reconocimiento de competencia de la Corte, fundado en el proceso de investigación por la muerte del señor Almonacid Arellano se inició en el mes de septiembre de 1973 y las acciones judiciales intentadas por los familiares con posterioridad a 1990 no tienen el carácter de "hechos independientes". La Comisión y los representantes, contradiciendo al Estado, señalaron que la Corte sí era competente para conocer de los hechos, que según su análisis tuvieron principio de ejecución con posterioridad al reconocimiento de la competencia. Esos hechos básicamente se refieren a tres aspectos, el primero respecto a la anuencia de competencia a la jurisdicción militar en detrimento de la jurisdicción civil, el segundo, respecto a la vigencia del Decreto Ley N° 2.191 con posterioridad a la entrada en vigencia de la Convención Americana en Chile, y el tercero respecto a la aplicación de ese Decreto Ley en el caso, por parte de las autoridades judiciales militares. Todas estas supuestas infracciones cometidas en perjuicio de los familiares del Sr. Almonacid. Ni la Comisión ni los representantes solicitaron que la Corte se pronunciara sobre el fallecimiento del señor Almonacid Arellano, ni señalaron ninguna equivocación de tipo procesal u otro caso acaecido previamente a la fecha de ratificación de la Convención, sino en relación "sobre la denegación de justicia recaída en la

La Corte determinó la responsabilidad del Estado de Chile por incumplir sus obligaciones derivadas de los Artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. También vulneró el Derecho a las Garantías Judiciales y Protección Judicial, en perjuicio de la Sra. Gómez y de los señores Alfredo, Alexis y José Luis Almonacid Gómez, al intentar amnistiar a los responsables de delitos de lesa humanidad mediante el Decreto Ley N° 2.191, el cual a consecuencia de los hechos es incompatible con la Convención Americana, por tanto carece de efectos jurídicos, a la luz de dicho tratado. La Corte declaró que la sentencia constituía en sí misma una forma de reparación.¹³

La Corte emite su Primera Resolución el 18 de noviembre de 2010, donde, cumpliendo lo ordenado en sentencia, el Estado presentó una serie de informes entre el 5 de junio de 2007 y el 23 de agosto de 2010, los cuales fueron observados sólo por la Comisión, ya que los representantes no hicieron uso de ese derecho a pesar de las reiteradas solicitudes en tal sentido. La Corte después de haber realizado análisis de los antecedentes puestos a su disposición, resolvió que el Estado había dado cumplimiento total al reintegro de las costas y gastos, con fecha 30 mayo de 2007, mediante depósito en la cuenta del Banco Estado de la Sra. Gómez, de igual manera había realizado la publicación de la sentencia en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, el 14 y 13 de mayo de 2007, respectivamente.

investigación de dicho delito". La Corte resolvió pronunciarse sobre los hechos señalados referentes a la competencia de la jurisdicción militar en desmedro de la jurisdicción civil, como la aplicación de la Ley de Amnistía, a hechos acontecidos con posterioridad al 21 de agosto de 1990. La Corte rechazó el argumento de la Comisión, en lo referido a las omisiones en la investigación sobre los responsables del homicidio del caso, ya que no fueron determinados los hechos, ni la fecha de ellos. En cuanto a la vigencia del Decreto Ley N° 2.191, la Corte dijo no ser competente para referirse a su aplicación y vigencia desde su creación en 1978, sino desde que Chile suscribe la Convención en 1990, por tanto desde entonces le es aplicable la obligación de modificar su legislación interna conforme al Artículo 2 de dicho Tratado, teniendo por tanto la Corte competencia desde entonces. Por todos los argumentos anteriormente señalados, la Corte rechaza la primera excepción preliminar de Competencia de la Corte *Ratione Temporis*. La segunda excepción preliminar interpuesta dice relación con las supuestas violaciones procesales durante la tramitación del caso ante la Comisión, transgrediendo el derecho del Estado a ser oído. Este último señaló al respecto que hubo varios problemas, uno al momento de notificarlo del Informe de Fondo, el cual estaba incompleto, y respecto de los plazos otorgados para su respuesta. Entre otros argumentos, señaló el envío apresurado del caso por la Comisión Interamericana a la Corte, sin tomar en cuenta las medidas adoptadas e informadas por el Estado y en consecuencia tal decisión habría sido tomada con anterioridad a la presentación del Informe Estatal, puesto que previo a él la Comisión ya había solicitado mayores antecedentes a los representantes.

¹³ Decide la Corte que debe el Estado asegurar que el Decreto Ley N° 2.191 no siguiera representando un obstáculo para la continuación de las investigaciones sobre los hechos que rodearon el fallecimiento del Sr. Almonacid y para la identificación y, en su caso, el castigo de los responsables. Asimismo el Estado debía cerciorarse que dicho decreto no siguiera representando un obstáculo para la investigación, juzgamiento, como la eventual sanción de los responsables de otras transgresiones similares acontecidas. Al Estado le correspondía cancelar US\$ 10.000 a la Sra. Gómez, por concepto de reintegro de costas y gastos, dentro de un año, desde la notificación de la sentencia. Debía realizar una sola vez la publicación de los hechos probados y de lo resuelto por la Corte en la sentencia, en el Diario Oficial y en otro de amplia circulación nacional, dentro de los seis meses de notificada la misma. La Corte además solicitó al Estado la presentación de un informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia, dentro del plazo de un año, desde la notificación.

Pero la Corte decidió mantener abierto el procedimiento de supervisión debido a que se encontraba pendiente aún la investigación, identificación, juzgamiento, en su caso, sanción a los responsables del fallecimiento del Sr. Almonacid, así como el deber de asegurar que el Decreto Ley N° 2.191 no siguiera representando un obstáculo para las investigaciones. El Estado informó que había dejado sin efecto las resoluciones y sentencias que sobreseyeron la causa por aplicación del Decreto Ley de Amnistía, remitiendo el expediente a la jurisdicción ordinaria y decretando la reapertura de la investigación en octubre de 2007. Finalmente envió copia del proyecto de ley de reforma al Código de Justicia Militar.¹⁴

La Corte señaló que había coincidencia en los dichos de las partes, respecto con que en fecha 11 de abril 2005 la Comisión había transmitido el Informe de Fondo al Estado, otorgando plazo hasta el 11 de junio de 2005 al Estado para que informara sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones. Sin embargo, el Estado alegó que el informe recibido se encontraba incompleto. La versión completa del informe fue recibida el 12 de mayo de 2005. Esto motivó que el 24 de junio de 2005 el Estado solicitara prórroga al plazo establecido, sugiriendo se le concediera hasta el 8 de julio de 2005. La Comisión Interamericana comunicó al Estado el 27 de junio de 2005 que concedía la prórroga solicitada hasta el 1 de julio de 2005, ante lo cual el Estado presentó su informe de cumplimiento de las recomendaciones el 11 de julio de 2005.

La Corte señaló que existían dos plazos, el primero, donde el Estado debía presentar su informe de cumplimiento, con vencimiento el 1 de julio de 2005, y el segundo plazo, que era donde la Comisión debía someter el caso a la Corte, el cual vencía el 11 de julio de 2005. El Estado confundió los plazos, siéndole aplicable el del 1 de julio de 2005, por ello la Corte estima que la presentación de dicho informe

¹⁴ La Corte lo consideró como principio de cumplimiento de la sentencia, quedando a la espera de la información sobre el proceso penal en curso, la cual debía abarcar la observancia de los criterios establecidos por la Corte, respecto a la forma requirió antecedentes sobre las medidas tomadas por las autoridades correspondientes. De igual manera indicó que aún se encontraba pendiente el asegurar que el Decreto Ley N° 2.191 no continuara representando un obstáculo para las investigaciones, ya que si bien el Estado había destacado dos iniciativas de reformas legislativas, una de ellas referida a la ley interpretativa del Artículo 93 del Código Penal, el cual establecía las causales de extinción de responsabilidad penal y la otra referida a armonizar la no aplicación del Decreto Ley N° 2.191. La Corte estimó necesario que el Estado explicara cómo ellas permitirán garantizar que dicho decreto no fuera aplicado por órganos o autoridades internas en la investigación y sanción de otras transgresiones similares a las acontecidas en el caso. Por ello reiteró que el Estado adoptara todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a los puntos pendientes, debiendo presentar a más tardar al 30 de marzo de 2011 un informe con información pormenorizada sobre los puntos pendientes de acatamiento. Ante lo cual los representantes y la Comisión debían presentar sus observaciones. Por lo tanto la Corte mantuvo abierto el procedimiento hasta el cumplimiento de la sentencia. Respecto a las excepciones preliminares, ellas fueron interpuestas por el Estado en cuanto a dos aspectos, el primero de ellos en relación a la supuesta incompetencia *ratione temporis* de la Corte para conocer del caso y la segunda de ellas por una supuesta violación procesal durante la tramitación del caso ante la Comisión, la cual habría violado el derecho del Estado a ser oído.

fue extemporánea y que el actuar de la Comisión se ajustaba a las normas.¹⁵ Respecto de la solicitud de antecedentes de la Comisión a los representantes, la Corte señaló que tal hecho no había ocurrido, ya que el cuestionado correo electrónico es una comunicación de 24 de junio de 2005, donde los representantes dan respuesta a la información solicitada por la Comisión el 20 de junio de 2005, de acuerdo al Artículo 43.3 del Reglamento de la Comisión. Por ello la Corte decidió desestimar la segunda excepción preliminar sobre las supuestas violaciones procesales durante la tramitación del caso ante la Comisión.

En cuanto a la excepción concluida por la Corte en relación a la falta de agotamiento de los recursos internos, la cual no fue expuesta por el Estado, sino dejándola entrever al señalar que “los representantes de los familiares de la víctima, quienes tenían la calidad de querellantes particulares, no interpusieron los recursos de que disponían para llevar la definición de esta materia ante la Corte Suprema de Justicia de Chile”. Por ello la Corte reiteró su criterio al señalar que dicha excepción era una cuestión de admisibilidad, debiendo el Estado indicar los recursos internos que debieron haber sido agotados y la efectividad de ellos. Asimismo la excepción debía plantearse ante la Comisión, en la etapa de admisibilidad, en caso contrario se presumía que el Estado renuncia tácitamente a ella. Además el Estado demandado podía renunciar a dicha excepción expresa o tácitamente. Pero en el caso, el Estado no invocó dicha excepción cuando debía de hacerlo, la Corte por ello entendió que había renunciado a ella en virtud del Principio del Estoppel, basándose en ello denegó el argumento estatal y procedió a reiterar su jurisprudencia desestimando tal excepción.¹⁶

¹⁵ No afectando el hecho de que la transmisión íntegra del informe se efectuara el 12 de mayo 2005, ya que la Comisión había considerado aquello otorgando extensión al plazo hasta 11 de junio al 1 de julio de 2005. Respecto a la consulta realizada el 17 de octubre de 2005 por la Comisión al Estado, para iniciar el procedimiento de solución amistosa, cuando a dicha fecha el caso estaba siendo visto por la Corte, si bien es incomprensible, éste no influye en seguir considerando la presentación del informe extemporáneo.

¹⁶ El Principio del Estoppel establece que un Estado no puede afirmar en su favor el no agotamiento de los recursos ante la Corte cuando no lo ha hecho valer previamente ante la Comisión Interamericana, como excepción preliminar de incompetencia en razón de una supuesta falta de agotamiento de recursos internos. Por lo tanto, la Corte Interamericana ha señalado que no le corresponde pronunciarse más allá, sólo reiterar su jurisprudencia, en la cual se afirma que si la excepción de no agotamiento de los recursos internos no es interpuesta oportunamente, se ha perdido la posibilidad de hacerlo. Señalado “De esta manera, los actos de reconocimiento realizados durante el trámite de una petición ante la Comisión resultan necesariamente relevantes para la determinación de la aplicación del Principio de Estoppel respecto de posiciones contrarias alegadas durante el procedimiento del caso ante la Corte. Esto es así ya que, de conformidad con el Artículo 61.2 de la Convención Americana, no puede iniciarse un proceso ante la Corte Interamericana sin que previamente se haya tramitado ante la Comisión Interamericana y agotado los procedimientos previstos en los Artículos 48 a 50 de dicho instrumento. Consecuentemente, la controversia que somete la Comisión a la jurisdicción de la Corte se debe ceñir a lo señalado en el informe contemplado en el Artículo 50 de la Convención. Por lo tanto, si la controversia planteada ante el Tribunal se basa necesariamente en dicho informe, fundamentado en ciertos actos de reconocimiento realizados por el Estado durante el procedimiento ante la Comisión, aquél no puede posteriormente negar el efecto jurídico que tienen dichos pronunciamientos en la determinación de la controversia que plantea la Comisión ante la Corte”.

6. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile

El 24 de noviembre de 2004 se presentó una petición ante la Comisión Interamericana por la Señora Karen Atala Riffo, quien estaba legalmente representada. El 17 de septiembre de 2010 la Comisión presentó demanda contra el Estado de Chile, habiendo aprobado previamente el informe de admisibilidad el 23 de julio de 2008. En la demanda se atribuyó responsabilidad internacional del Estado al violar la Convención Americana por el trato discriminatorio e interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que habría sufrido la Sra. Atala por su orientación sexual en el proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas M., V. y R. De igual manera se alegó la inobservancia del interés superior de las niñas, cuya custodia y cuidado fueron determinados en incumplimiento de sus derechos y sobre la base de supuestos prejuicios discriminatorios. En su escrito de contestación, el Estado negó toda responsabilidad en los hechos alegados, presentados por la Comisión y los representantes.

La Corte resolvió que el Estado de Chile era responsable por la violación de varias disposiciones de la Convención Americana, como el Derecho a la Igualdad y la No Discriminación, en perjuicio de la Sra. Atala, el Derecho a la Igualdad y la No Discriminación en perjuicio de las niñas M., V. y R, por violar el Derecho a la Vida Privada de la Sra. Atala. Por la violación del Artículo 11.2 y 17.1, en relación con el Artículo 1.1 de la Convención en perjuicio de la Sra. Atala y de las niñas M., V. y R.

Se determinó así mismo la responsabilidad del Estado por violar el Derecho a ser Oído de las niñas M., V. y R y la violación de la Garantía de Imparcialidad, respecto a la investigación disciplinaria de la Sra. Atala. La Corte resolvió que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y del Juzgado de Menores de Villarrica no habían violado la Garantía Judicial de Imparcialidad. La Corte dispuso en la sentencia que ella constituía una forma de reparación, debiendo el Estado proporcionar inmediatamente atención médica y psicológica o psiquiátrica a las víctimas que así lo soliciten para su rehabilitación, ellas serán atendidas gratuitamente en sus instituciones destinadas a ello de manera adecuada y efectiva.

De igual manera, el Estado debe proceder a la publicación de la sentencia, dentro de los 6 meses desde su notificación, en el Diario Oficial una sola vez el resumen de ella y en otro diario de amplia circulación nacional su texto íntegro, además debe estar disponible durante un año en un sitio web oficial. El Estado debe realizar un Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional por los hechos del caso, debiendo hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas, contando con la participación de las víctimas (que así lo deseen) como de las organizaciones que las representaron nacional e internacionalmente. Para su ejecución corresponde consultar previamente a los representantes dentro de un año desde la notificación de la sentencia. En necesaria la asistencia de autoridades estatales de alto rango, determinadas por

el Estado, como representación del Poder Judicial en dicho acto. Así mismo, mantener los programas y cursos de educación

El Estado debe continuar implementando programas y cursos permanentes de educación en materia de derechos humanos, orientación sexual y no discriminación. Se debe hacer especial mención en dichos programas de la sentencia. La capacitación será dirigida a funcionarios públicos de diferentes áreas regionales y nacionales, incluyendo los escalafones de la rama judicial. Al Estado le corresponde pagar indemnización por daño material e inmaterial, reintegrando costas y gastos incurridos, US\$ 10.000 por los gastos en atención médica y psicológica, incurridos por la Sra. Atala, adicionalmente a ello US\$ 20.000 más para la Sra. Atala y de US\$ 10.000 para cada una de las niñas M., V. y R. por concepto de indemnización por daño inmaterial.

El Estado debe informar a la Corte dentro de un año de notificada la sentencia del avance en el cumplimiento de la misma. En tanto la Corte supervisará la misma, hasta que se realice su total ejecución, realizado aquello cerrará el caso.¹⁷

A raíz del fallo el Ministerio de Justicia emitió un comunicado en que se destaca el compromiso permanente del Estado de Chile en el respeto de los derechos humanos, como en el cumplimiento de la sentencia pronunciada. De igual manera hace hincapié en que el ordenamiento jurídico chileno no es discriminatorio y que el caso corresponde a una sentencia específica, la cual se aparta de los estándares de la Corte, en particular la sentencia de 2004, donde la tuición de las menores del caso fue entregada al padre. Reforzando su posición el hecho que la Corte desestimó modificar el ordenamiento jurídico interno.

Por su parte la Corte Suprema mediante su vocero Sr. Jaime Rodríguez Espoz señaló que en este caso el demandado y condenado no fue el Poder Judicial, sino el Estado de Chile. Respecto al acto de desagravio, no confirmó su asistencia, ya que tal decisión sería considerada en su oportunidad, al señalar que "Ahí habrá que coordinarlo y en ese momento se resolverá quiénes asisten a

¹⁷ La importancia del caso radica en lo razonado por la Corte Interamericana, respecto 1) a los alcances del Derecho a la Igualdad y la No Discriminación; 2) la orientación sexual como categoría protegida por el Artículo 1.1 de la Convención Americana; 3) si había existido en el caso una diferencia de trato basada en la orientación sexual; y 4) si dicha diferencia de trato constituyó discriminación. Destacando entre ellos el interpretar la "orientación sexual" como una garantía protegida por el Artículo 1.1 de la Convención Americana incluyéndola en "cualquier otra condición social". El artículo no es taxativo, sólo enunciativo, recogiendo así la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que éste señala que los Tratados de Derechos Humanos deben ser interpretados evolutivamente en relación al Artículo 29 de la Convención Americana y la Convención de Viena. Así mismo, la Corte se refirió a las resoluciones emitidas por diferentes organismos internacionales, entre ellos la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Por ello prohíbe cualquier forma de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Este último caso ha generado gran repercusión en los diferentes sectores del Estado y en la opinión pública, debido al contenido de la sentencia, donde finalmente resulta condenado el Estado de Chile por su responsabilidad internacional al vulnerar el Derecho a la Igualdad y la No Discriminación de la Sra. Atala, con motivo de su orientación sexual.

ese acto, quienes no. La verdad es que nosotros no tenemos esa iniciativa. Si el Poder Ejecutivo nos invita, evaluaremos la posibilidad de asistir o no, según la circunstancia, pero yo no puedo darle una respuesta en este momento anticipada, porque también es probable que el Ejecutivo haga un acto por su cuenta independiente del Poder Judicial”.

Días después de dichas declaraciones, el Gobierno a través de su Ministro de Justicia Sr. Teodoro Ribera y la Cancillería, informaron que serían los encargados de comenzar las comunicaciones con la Sra. Atala y sus representantes, para dar cumplimiento a la sentencia, partiendo con el ofrecimiento formal de asistencia médica y psicológica. Así mismo, informó que prepararían, de la mejor manera, la forma en que se llevaría a cabo el acto ordenado por la Corte, invitando a aquel a un alto representante del Poder Judicial. Finalizando en que la interposición de un recurso de aclaración dependía de la respuesta de las víctimas y la interpretación que ellas en su caso requirieran. Cabe señalar que se realizó la publicación de la sentencia como lo ordenó la Corte, comenzando de esta manera su cumplimiento.

En el mes de octubre de 2012 el Presidente de la Corte Suprema se reunió con la jueza Sra. Atala, confirmando su asistencia personal al Acto de Desagravio ordenado por la Corte Interamericana, en atención a que ella es una jueza de la República, e indicando que con posterioridad se decidiría cuáles otros miembros del Poder Judicial asistirían.

Por su parte, el padre de las menores del caso, Sr. Jaime López, expresó su total rechazo a la sentencia de la Corte, donde sus 3 hijas fueron declaradas “víctimas”, señalando que nunca fueron consideradas a lo largo del proceso, sólo al final fueron escuchadas 2 de sus hijas, mediante una diligencia sin las garantías necesarias para su realización. Así mismo enfatizó que una de sus hijas no fue entrevistada, quien además no se considera víctima en el caso, por ello dirigió una Carta a la Corte Interamericana, la cual no fue respondida. Finalmente señala que tanto particulares como el Estado guardan silencio frente a esta situación. Cabe señalar que el Sr. Jaime López solicitó formalmente la participación de sus hijas en el proceso, representándolas legalmente en su calidad de padre, así mismo requirió incorporarse en el proceso como tercero interviniente y solicitó la nulidad de todo lo actuado ante la Comisión y la Corte, lo cual fue rechazado por la Corte, ya que se argumentó no estaba legitimado para actuar en el proceso.

Los representantes de la Sra. Atala destacaron la importancia a nivel internacional del fallo, al haber sido considerada la orientación sexual y la identidad de género como una categoría prohibida para poder discriminar por parte de los Estados. Como también el dar la calidad de “familia” a aquella compuesta por las hijas y pareja del mismo sexo de la Sra. Atala. De igual manera res-

pondieron a los dichos del Sr. López señalando que las menores sí estaban en conocimiento del proceso y por ello dos de ellas habían declarado de manera secreta para su protección.

Los abogados de la Sra. Atala y del Sr. López marcaron sus posiciones frente a la validez del fallo. El abogado Sr. Álvaro Ferrer considera la sentencia nula de acuerdo con tres argumentos. El primero de ellos dice relación a que la sentencia fue pronunciada con grave vulneración del debido proceso, ya que desde el inicio del proceso en 2008 las menores nunca fueron notificadas de aquel, siendo que eran consideradas partes, por lo cual no pudieron hacer ejercicio efectivo de sus derechos. Lo anterior, marcado por el hecho que la audiencia donde fueron citadas se realizó sólo 17 días antes del pronunciamiento del fallo de la Corte. En segundo lugar, se violó su derecho a ser oídas, ya que dicha diligencia se realizó sin la presencia de alguna persona que velara por sus derechos, si no que con la presencia de la psiquiatra presentada como perito por la Sra. Atala. Además para calificar de víctimas a las menores es considerada dicha audiencia, la cual fue secreta, y se desconoce la veracidad de tales declaraciones. El tercer argumento se basa en que la calificación de víctima se presume, aunque no se les haya oído por razones de fuerza mayor, según la Corte. Recalcando que ello no existió, ya que una de los menores envió una carta, la cual no fue respondida, ni señalada en el fallo de la Corte, donde expresamente señalaba que no se consideraba víctima.

En tanto el abogado Sr. Jorge Contesse señala que esos dichos no tienen asidero, que la sentencia es contra el Estado de Chile, y no contra el padre, que actuó de manera discriminatoria por medio de una decisión de la Corte Suprema. Dicho fallo se basó en estereotipos. La importancia del fallo dictado por la Corte Interamericana radica en la decisión de declarar como categoría protegida en la Convención la orientación sexual e identidad de género. En segundo término indicó que existen diferentes tipos de familias, todas ellas deben ser protegidas por el Estado, sin diferenciar unas de otras. Para que una mujer pueda realizarse junto a sus hijas, sin postergar elementos esenciales de su personalidad. En tercer término fundamentar una decisión judicial basada en el interés superior del niño no es suficiente. Dicho principio debe tener conexión en cómo uno de los padres es una mejor opción sobre otro, es decir, no solo en la teoría, sino en antecedentes empíricos, por tanto el posible estigma social que calificó la Corte Suprema en su momento no pudo haber sido calificado como un daño efectivo .

Finalmente el Acto de Desagravio ordenado en la sentencia se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2012, en el salón O'Higgins del Ministerio de Relaciones Exteriores, contando con la asistencia de variadas autoridades, entre ellas el presidente de la Corte Suprema, Sr. Rubén Ballesteros, el ministro de Justicia, Sr. Teodoro Ribera; la ministra del Trabajo, Sra. Evelyn Matthei; y la subsecretaria de Justicia, Sra. Patricia Pérez. En dicho acto se procedió a la lectura del fallo

de la Corte Interamericana, donde la magistrada Sra. Atala señaló que “no se condice con un Estado laico imponer principios morales o religiosos respecto a lo que es correcto o incorrecto”. Posteriormente el Presidente de la Corte Suprema indicó que su decisión de asistir fue personal, “Como cualquier juez de la República he querido estar junto a esta señora para poder aliviar en lo posible con mi presencia los sufrimientos que ha tenido”.

El 21 de noviembre de 2012, la Corte Interamericana resuelve la solicitud de interpretación de la sentencia de fondo, reparaciones y costas, solicitada el 5 de junio de 2012 por los representantes de la Sra. Atala, en lo concerniente a algunas de las reparaciones establecidas, respecto a i) “la recepción del consentimiento libre e informado de la niña V., relativo a si se considera parte lesionada “a efectos del párrafo 71 en relación a los párrafos 255, 299 y 313 de la Sentencia; ii) “la ejecutabilidad de la rehabilitación, ordenada como reparaciones por la Corte a favor de M., V. y R.”, y iii) “el pago de honorarios y gastos incurridos por la perito María Alicia Espinoza”¹⁸.

Respecto al primer punto, los representantes señalaron la necesidad de precisar las condiciones en las que debe llevarse a cabo la entrevista con la menor V. por la institución estatal responsable de la infancia, indicando que el Estado no habría entendido la diferencia hecha por la Corte entre “indemnización y otras reparaciones”, puesto que “el Estado considera que la entrevista con V. tendría por objeto determinar si se le considerará víctima del proceso frente a la Corte”, por ello solicitaron la interpretación de los párrafos 71, 255, 299 y 313 de la sentencia de tal manera que se concluya que “la indemnización no puede estar en disputa”, de lo contrario sería el propio Estado quién determinaría quienes son víctimas. Ante lo cual el Estado dio respuesta el 21 de julio de 2012, indi-

¹⁸ Párrafo 71; “Como se indicó anteriormente, la niña V. no participó en dicha diligencia por motivos de fuerza mayor (supra párr. 13). Con base en las consideraciones anteriores, el Tribunal no encuentra ningún elemento para considerar que la niña V. no se encuentra en la misma condición que sus hermanas (infra párrs. 150, 176, 178 y 208). Sin embargo, para efectos de las reparaciones la autoridad nacional competente para la infancia deberá constatar en forma privada la opinión libre de la niña V. sobre si desea ser considerada parte lesionada”. Párrafo 255; “[] Las víctimas que soliciten esta medida de reparación, o sus representantes legales, disponen de un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, para dar a conocer al Estado su intención de recibir atención psicológica o psiquiátrica”.

Párrafo “299. [] la Corte estima pertinente fijar, en equidad, la cantidad de US\$ 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) para la señora Atala y de US\$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) para cada una de las niñas M., V. y R. por concepto de indemnización por daño inmaterial. Párrafo 313. En cuanto a las indemnizaciones ordenadas a favor de las niñas M., V. y R., el Estado deberá depositarlas en una institución financiera chilena solvente en dólares estadounidenses. Las inversiones se harán dentro del plazo de un año, en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria, mientras las beneficiarias sean menores de edad. Dicha suma podrá ser retirada por aquellas cuando alcancen la mayoría de edad, en su caso, o antes si así conviene al interés superior de las niñas, establecido por determinación de una autoridad judicial competente. Si no se reclaman las indemnizaciones correspondientes una vez transcurridos diez años contados a partir de la mayoría de edad de cada niña, la suma será devuelta al Estado con los intereses devengados. En lo que atañe a la niña V., a los efectos de las reparaciones, se debe estar a lo establecido en el párrafo 71 de la presente sentencia.

cando que queda claro en la redacción de la sentencia la necesidad de obtener la opinión de la menor V., en relación a las reparaciones que le corresponden, en especial a lo concerniente al pago de las indemnizaciones, por tanto no es él quien determina si es considerada parte lesionada, si no la misma menor libremente. La Comisión añadió que el interpretar si la indemnización está o no sujeta a la manifestación de voluntad de la menor es relevante y podría beneficiar su cumplimiento. La Corte Interamericana resuelve que considera claro que el Tribunal estableció la forma de constatar la opinión de la menor V., sobre si desea ser considerada parte lesionada, reconociendo que no se instruyó un procedimiento específico para ello, pero sí estableció que la constatación debía de ser de forma privada y así mismo la propia sentencia proporcionó los estándares específicos a considerar para hacer efectivo el derecho a ser oído de los niños. Destacando la manera en que se llevó a cabo diligencia realizada con las hermanas de la menor M. y R. en la sentencia bajo el párrafo "Derecho de las niñas M. V. y R. a ser escuchadas y a que se tengan en cuenta sus opiniones", agrega que sí hay una diferencia entre la indemnización por concepto de daño inmaterial y el resto de las indemnizaciones. Por ello la Corte interpreta que el Estado debe dar cumplimiento a las indemnizaciones en cuestión mediante el depósito en una institución financiera, en la forma señalada en la sentencia, ello sin la necesidad de obtener la opinión previa de la menor V. considerando que sólo podrá retirar los fondos al momento de obtener la mayoría de edad. En lo referido al resto de las medidas de reparación ordenadas a favor de la menor V., sí se requerirá la constatación de dicha opinión libre.¹⁹

Finalmente los representantes solicitaron que se adicione a las costas el "Pago de honorarios y gastos incurridos por la perito María Alicia Espinoza" con mo-

¹⁹ La segunda interpretación solicitada dice relación con la "ejecutabilidad de la rehabilitación, ordenada como reparaciones por la Corte a favor de M. V. y R." Los representantes alegaron que debido a que las tres menores se encuentran actualmente bajo la tutela y cuidado personal de su padre no poseen la autonomía y libertad suficientes para expresar la aceptación de la terapia psicológica, lo cual podría hacer inaplicable la medida decretada por la Corte. Expusieron que se "indique expresamente las condiciones materiales en que es posible hacer efectivo el plazo de los seis meses, es decir, a partir de que cumplan 18 años de edad y terminen su escolaridad". El Estado manifestó que ello "implica una abierta contradicción a lo dispuesto por la sentencia y, lejos de ser una solicitud de interpretación, implica la pretensión de una modificación de lo sustantivo de la misma" retardando su cumplimiento. La Comisión por su parte indicó la relevancia de considerar la información proporcionada por los representantes y poder "contar con cierta flexibilidad a fin de tomar en consideración circunstancias como las planteadas que podrían incidir en el carácter preclusivo del plazo establecido en la sentencia". La Corte Interamericana argumenta que respecto de la medida de rehabilitación médica y psicológica ordenada en la Sentencia "considera que es claro que se ordenó al Estado prestar dicha reparación de forma inmediata" por lo que el plazo de seis meses indicado es para poner en conocimiento del Estado la intención de recibir la misma, desde la notificación de la sentencia. "Por tanto, la solicitud de los representantes no corresponde a una interpretación de los términos de la Sentencia, sino que lo que se pretende es una modificación de lo que fue ordenado en la misma, por cuanto se solicitó que se entienda que la medida sólo podría ser ejecutable una vez las niñas M., V. y R alcancen la mayoría de edad y terminen su escolaridad". Agregando que en caso de controversia en la aplicación de la medida, ella deberá ser examinada en la correspondiente etapa de supervisión de cumplimiento de la sentencia. Por tanto la Corte rechaza la solicitud de interpretación por no ajustarse a los requisitos establecidos en el Artículo 67 de la Convención.

tivo del viaje a Santiago de Chile para realizar la entrevista a las menores del caso. El Estado indicó que “los representantes pretenden utilizar la instancia de la solicitud de interpretación para agregar prueba respecto de los gastos de la perito, toda vez que la oportunidad procesal para hacerlo no fue utilizada por negligencia imputable a los propios representantes”. La Comisión por su parte indicó que no tenía observaciones que formular. La Corte por su parte argumenta que sí se tuvo en consideración dichos gastos, ya que estos fueron expuestos, más no se adjuntó ningún comprobante de los mismos, por lo cual la solicitud en cuestión “constituye una nueva solicitud que se relaciona con cuestiones de hecho y de derecho sobre las cuales el Tribunal ya adoptó una decisión”, lo que hace improcedente la solicitud planteada, ya que el fallo no puede ser modificado ni ampliado, por tanto resolvió rechazar la misma.

7. Efecto de las sentencias pronunciadas en contra del Estado de Chile

Las sentencias de la Corte pueden tener variados efectos, dependiendo de las medidas de reparación ordenadas en ella. De acuerdo a lo señalado por la Corte se encuentran:

Medidas de restitución; llevadas a cabo mediante el mayor restablecimiento posible de la situación existente antes de la violación del derecho por parte del Estado, como el anular los antecedentes judiciales, como ocurrió en el Caso Palamara Iribarne.

Medidas de rehabilitación; destinadas a proporcionar atención médica y psicológica que la Corte considere pertinente, la cual debe ser gratuita e inmediata, incluyendo, entre otras, la entrega de medicamentos, lo cual fue ordenado por la Corte en el Caso Atala.

Medidas de satisfacción; cuyo fin es reparar el daño inmaterial, entre ellas se encuentran obras o actos de pública repercusión, como de reconocimiento de responsabilidad internacional, disculpas a favor de las víctimas o de conmemoración de los deudos, también publicación de la sentencia, entre otras. En éstas se enmarca el Caso Atala, donde el Estado de Chile deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, así mismo en totalidad de los casos ha ordenado la publicación de la sentencia por medios electrónicos o escritos.

Garantías de no repetición; destinadas a evitar la ocurrencia de las mismas violaciones estudiadas en cada caso por la Corte. Según su naturaleza, la Corte las clasifica como a) medidas de adecuación de la legislación interna a los parámetros convencionales; b) capacitación a funcionarios públicos en derechos humanos; y c) adopción de otras medidas para garantizar la no repetición de

violaciones. Ello fue decretado por ejemplo en el Caso Almonacid Arellano y Caso Claude Reyes.

Obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar; los Estados deben garantizar la investigación efectiva de los hechos que constituyen violación de los derechos humanos, determinando los responsables de aquellos y sancionándolos. Esto requiere de tiempo y trabajo para los Estados. Tal como sucedió en el Caso Palamara Iribarne, el cual aún se encuentra vigente.

Alcances dentro de la normativa chilena.

El Artículo 2 de la Convención Americana señala el deber de los Estados de adoptar disposiciones de derecho interno necesarias para hacer efectivo los derechos y libertades protegidos por la Convención, por ello la Corte, en caso de determinar la responsabilidad internacional de un Estado por la violación de los derechos, está facultada para disponer la adopción de medidas de derecho interno, reformas y adecuación de las leyes nacionales. Es decir, los Estados no sólo tienen la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos en ella consagrados, sino que también deben evitar promulgar aquellas leyes que impidan el libre ejercicio de estos derechos, y evitar que se supriman o modifiquen las leyes que los protegen.

La Corte en su jurisprudencia ha señalado que es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que los obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de "control de convencionalidad" entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debería considerar no solamente el Tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete último de la Convención Americana.

Respecto a los casos donde la Corte ha fallado en contra del Estado de Chile, en la generalidad de ellos la Corte ha ordenado la reforma de la legislación nacional, tal es el caso de "La Última Tentación de Cristo", donde la Corte ordenó modificar el ordenamiento jurídico interno para suprimir la censura previa, permitiendo la exhibición de la película en cuestión. Ante lo cual el Estado de Chile realizó la modificación decretada mediante la publicación de la Ley 19.846 el 25 de agosto de 2001, sobre Calificación Cinematográfica, permitiendo la exhibición de la película. La Corte dio por cerrado el caso, ya que el Estado cumplió con lo

ordenado por ella. Cabe señalar que este caso ha sido destacado por la doctrina internacional, ya que implicó una modificación a la Constitución chilena, con la finalidad de adecuarla al ordenamiento jurídico internacional.

En el caso *Palamara Iribarne vs. Chile*, la Corte ordenó derogar y modificar las normas internas incompatibles con los estándares internacionales en materia de libertad de pensamiento y expresión, como lo eran el delito de desacato y amenazas. Si bien el Estado ha realizado avances en la materia, como la promulgación de la Ley N° 20.477, la Corte Interamericana los consideró insuficientes, señalando que habían transcurrido más de seis años a esa fecha de la dictación de la sentencia. Ello llama la atención, ya que la sentencia data de 2005, y aún el Estado de Chile no ajusta su legislación a lo ordenado por la Corte en este caso.

A diferencia de lo sucedido en el caso *Claude Reyes y otros con Chile*, donde se discutía el acceso a la información bajo el control del Estado, la Corte indicó el deber de garantizar la efectividad de un procedimiento administrativo adecuado para las solicitudes de información, en plazos establecidos y bajo funcionarios capacitados. Por ello el Estado publicó la Ley N° 20.285 de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, que reglamenta el Artículo 8° de la Constitución, estableciendo el procedimiento para garantizar el acceso a la información, con ello la Corte dio por cumplido lo ordenado en la sentencia.

En el Caso *Almonacid Arellano*, la Corte señaló que el Decreto Ley N° 2191 era incompatible con la Convención, solicitando que no siguiera representando un obstáculo para las investigaciones de los responsables del fallecimiento del Sr. Almonacid y de otros casos similares acontecidos. El Estado realizó dos iniciativas de reformas legislativas, las cuales no han sido suficientes para la Corte, manteniendo abierto el caso a la fecha.

En el caso *Atala*, la Corte no consideró necesaria la modificación de la legislación interna, a pesar que ello fue solicitado por los representantes y la Comisión, esto en atención a que la Corte limitó su examen a la relación entre la aplicación judicial de ciertas normas con prácticas discriminatorias. El Tribunal argumentó que no analizó la compatibilidad de una determinada norma con la Convención Americana, ni fue ello materia del caso. Asimismo, los representantes no aportaron elementos suficientes que permitieran inferir que las violaciones se hayan derivado de un problema de las leyes en sí mismas. Por tanto, la Corte consideró que no era pertinente, en las circunstancias del caso, ordenar la adopción, modificación o adecuación de normas específicas de derecho interno.

Argumentos para el cumplimiento una sentencia internacional.

De acuerdo al *Pacta Sunt Servanda*, consagrado en el Artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, de 1969, todo tratado en vigor

obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Sin embargo, se ha observado que los Estados han adoptado diferentes posturas al ser notificados de una sentencia contraria a sus intereses. El profesor Carmona Tinoco define la posición de un Estado como la actitud de éstos frente a la competencia de la Corte, durante el proceso de ésta, en la aceptación de su fallo y también en su cumplimiento. Dichas posiciones han variado a lo largo de los años debido al cambio en las normas de procedimiento, pudiendo distinguirlas y resumirlas en cuatro; en la primera de ellas, los Estados dilataban el proceso ante la Corte, tratando de evadir su responsabilidad, llegando en algunos casos a llevarse en rebeldía del Estado o inclusive llegando a la denuncia de la Convención; en un segundo momento los Estados cuestionaron el procedimiento llevado a cabo ante la Comisión Interamericana, como el actuar de este órgano; ya en los últimos años se ha observado una tercera postura, donde los Estados han participado durante el proceso llevado a cabo ante la Corte, realizando sus planteamientos en la defensa de su postura, adoptando acuerdos de solución amistosa en otros casos y respetando el fallo, en caso de ser negativo; la última posición observada ha llevado a los Estados a reconocer su responsabilidad internacional, produciéndose un allanamiento.

Se hace énfasis en que el Estado de Chile debe cumplir una Sentencia dictada por la Corte Interamericana, ya que ratificó la Convención Americana mediante el depósito del Instrumento de Ratificación ante el Secretario General de la OEA el 21 de agosto de 1990, reconociendo competencia a la Comisión Interamericana y competencia obligatoria de pleno derecho a la Corte Interamericana respecto de los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana. Por ello no parece adecuado lo sucedido en el Caso Palamara, respecto a la excesiva demora en el cumplimiento del fallo, tardando varios años en ello. Lo anterior lleva a reflexionar respecto al valor que el Estado atribuye a una sentencia emitida válidamente por la Corte Interamericana. El Estado cuestiona el raciocinio de la Corte a posteriori, cuando los fallos de la Corte deben simplemente acatarse, ya que no son susceptibles de recurso alguno y en caso de existir dudas acerca de su alcance, podríasolicitarse su interpretación.

Diferencias entre ejecución total y parcial de un fallo internacional.

Como se ha señalado, es la Corte Interamericana quien determina cuando una sentencia se ha ejecutado total o parcialmente. Para ello toma en consideración la naturaleza de las reparaciones decretadas, para proceder al otorgamiento de plazos con el objetivo de cumplir los puntos resolutivos, como por ejemplo en la modificación de la legislación vigente. La Corte está consciente de que aquello lleva más tiempo, lo cual necesariamente hará mantener el caso abierto hasta la ejecución total del fallo. Supone entonces un quehacer más complejo por parte del Estado, por ello, aunque la gran mayoría de la sentencia, se en-

cuentre cumplida, la Corte no dará por cerrado el caso hasta su cumplimiento total y de la manera en que se estableció su cumplimiento.

En este sentido resalta la idea que para que ocurra un cumplimiento total, los diferentes poderes del Estado deben trabajar en conjunto para alcanzar dicho objetivo. Este deber es de todas las instituciones, ello sin desconocer que existen temas más sensibles y de difícil tramitación, es necesario sobrepasar dicho obstáculo y dar una respuesta oportuna.

Consecuencias jurídicas frente a un incumplimiento

Los fallos de la Corte Interamericana no pueden ejecutarse de manera forzada, a lo que la doctrina internacional ha llamado "obligatoria pero no ejecutiva", ya que de acuerdo al Artículo 68.1 de la Convención, "los Estados partes se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes". Así la Corte no puede obligar a un Estado a cumplir su sentencia, ello debería fluir del respeto al derecho internacional.

La Corte sí puede ejercer sus facultades jurisdiccionales e informar anualmente a la Asamblea General de la OEA de los Estados que no han dado cumplimiento a lo ordenado por ella. En su último informe del año 2012, la Corte Interamericana señaló los casos que se encuentran en etapa de supervisión de cumplimiento. Respecto de Chile, se señalan el Caso Almonacid Arellano, Caso Palamara Iribarne y Caso Atala Riffo y Niñas, indicando al respecto que para la Corte la supervisión de cumplimiento es una de sus actividades más demandantes, ya que los casos se incrementan cada año.

Conclusiones

El Estado de Chile a la luz de la Convención Americana podría avanzar a través de la creación de un órgano especializado que cumpla la función de comunicación con los órganos de la Convención Americana y con las partes intervinientes, permitiendo el seguimiento del proceso y, más importante aún, el cumplimiento oportuno y cabal de las resoluciones y sentencias emitidas por la Corte Interamericana. Todo pareciera indicar la conveniencia de contar con un órgano técnico especializado. Este órgano daría uniformidad a la posición del Estado frente a la Corte Interamericana. Además, proporcionaría cercanía e información oportuna a la ciudadanía respecto de los diferentes procesos llevados a cabo ante la Comisión y la Corte, como medidas provisionales soluciones amistosas, entre otras. De esta manera las respuestas a las solicitudes y resoluciones, se cumplirían dentro de los plazos establecidos en la Convención.

En este sentido es un avance el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y establece adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, iniciado por Mensaje al Congreso Nacional el 2 de marzo de 2012. Si bien el Senado aprobó dicho proyecto por unanimidad el 5 de marzo de 2013, éste aún se encuentra en su Primer Trámite Constitucional.²⁰

De igual manera es importante reconocer el avance notable que ha tenido el Estado de Chile en el cumplimiento de las resoluciones como de las sentencias. La experiencia ha permitido un mejor conocimiento del Sistema Interamericano. Se aprecia una evolución. Por ejemplo, en el caso "La Última Tentación de Cristo" hubo incumplimiento de plazos, y una cierta desorientación frente al actuar de la Comisión y la Corte, contrastando con la situación en el caso Atala, donde la respuesta del Estado fue clara y oportuna. También podría explorarse que la Corte Interamericana pueda contar con un procedimiento que le permita exigir eficazmente el cumplimiento de una sentencia.

Bibliografía

AYALA CORAO, Carlos M. (2007) "La ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en *Revista del Centro de Estudios Constitucionales* (Universidad de Talca) Vol. V. 001, pp. 127-201 (online) [Fecha de consulta 6 de septiembre de 2012] Disponible en; www.cecoch.cl/html/revista/docs/estudiosconst/revistaano_5_1_hm/completa.pdf

CAMPUSANO DROGUETT, Raúl Fernando. *El Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos*. Publicado por la Fundación Friedrich Naumann, Santiago, 1994.

CARMONA TINOCO, Jorge Ulises: (2007) "Evolución y Perspectivas de la Participación de los Estados en el Proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en *Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas* (Universidad Nacional Autónoma de México) pp. 1 (online) [Fecha de consulta 14 de agosto de 2012] Disponible en; <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2496/6.pdf>

CARMONA TINOCO, Jorge Ulises (2005), "La Solución Amistosa de Peticiones de Derechos Humanos en El Ámbito Universal y Regional, con Especial Referencia al Sistema Interamericano", en *Anuario Mexicano de Derecho Internacional* (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México) Vol. V, pp. 83-122 (online) [Fecha de consulta 14 de agosto de 2012] Disponible en; http://biblio.juridicas.unam.mx/estrev/derint/cont/5/art/art3.htm#N*

²⁰ En el Mensaje se reconoce que "en Chile, por tanto, no se ha implementado cabalmente una política unitaria que permita coordinar las distintas iniciativas sectoriales y desarrollarlas de una manera coherente, en cuanto a la definición y aplicación de las políticas públicas en la materia". Entre sus facultades, destacamos, el "Recibir y procesar las quejas y denuncias presentadas en contra del Estado de Chile ante organismos internacionales con competencia en Derechos Humanos y coordinar su defensa con otros organismos públicos, en los litigios o procedimientos derivados de los mismos, sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Relaciones Exteriores" y "Coordinar, en consulta con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la ejecución de medidas cautelares, medidas provisionales, acuerdos amistosos, recomendaciones y resoluciones originadas en el Sistema Interamericano y en el sistema Universal de Derechos Humanos".

FIX-ZAMUDIO, Héctor (2004) "El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en las Constituciones Latinoamericanas y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en *Revista Latinoamericana de Derecho* (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México) N° 1. Pág. 173 (online) [Fecha de consulta 25 de octubre de 2012] Disponible en: www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlad/cont/1/art/art5.pdf

GARCIA-SAYÁN, Diego (2009) "La Recepción Nacional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en *Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas* (Universidad Nacional Autónoma de México) pp. 105 (online) [Fecha de consulta 20 de Agosto de 2012] Disponible en; <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2740/11.pdf>

Normas citadas

Convención Interamericana de Derechos Humanos (1969) [Fecha consulta 11 de mayo de 2012], Disponible en: www.bcn.cl/tratados/tratados_pdf/16022.pdf

Carta de la Organización de los Estados Americanos [Fecha de consulta 20 de junio de 2012] Disponible en: www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/19.CARTA%20DE%20LA%20ORGANIZACION.pdf

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre [Fecha de consulta 20 de junio de 2012] Disponible en: www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/4.DECLARACION%20AMERICANA.pdf

Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [Fecha de consulta 20 de junio de 2012] Disponible en: www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/24.ESTATUTO%20COMISION.pdf

Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [Fecha de consulta 20 de junio de 2012] Disponible en: www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp

Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Fecha de consulta 20 de junio de 2012] Disponible en: www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/26.ESTATUTO%20CORTE.pdf

Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Fecha de consulta 20 de junio de 2012] Disponible en: www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/27.Reglamento%20Corte.pdf

Constitución Política de la República de Chile.

Jurisprudencia internacional

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2012): Caso AtalaRiffo y Niñas vs. Chile. Solicitud de Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2012. Serie C N° 254 [Fecha de consulta: 16 de mayo de 2013]. Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_254_esp.pdf

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2012): Caso AtalaRiffo y Niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C N° 239 [Fecha de consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2011): Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de Julio de 2011. [Fecha de consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/palamara_01_07_11.pdf

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2010): Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de noviembre de 2010. [Fecha de consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/almonacid_18_11_10.pdf

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2009): Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de septiembre de 2009. [Fecha de consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/palamara_21_09_09.pdf

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2009): Caso Acevedo Buendía y otros vs. Perú, ("Cesantes y Jubilados de la Contraloría") vs. Perú, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C N° 1998 [Fecha de consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en: www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=8

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2008): Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución del Presidente en ejercicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 15 diciembre de 2008. [Fecha de consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/palamara_15_12_08.pdf

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2008): Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008. [Fecha de consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/reyes_24_11_08.pdf

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2008): Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución del Presidente en Ejercicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 junio de 2008. [Fecha de consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/reyes_10_06_08.pdf

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2008): Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 02 mayo de 2008. [Fecha de consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/reyes_02_05_08.pdf

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2007) Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de Noviembre de 2007. [Fecha de consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/palamara_30_11_07.pdf

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2006): Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Fondo, Reparaciones y Cotas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. [Fecha de consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2006): Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Excepciones Preliminares, Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C N° 154 [Fecha de consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2005): Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135. [Fecha de consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2003): Caso "La Última Tentación de Cristo"(Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de Noviembre de 2003. [Fecha de consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/tentacion_28_11_03.pdf

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2002): Caso "La Última Tentación de Cristo"(Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de noviembre de 2002. Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/olmedo_28_11_02.pdf

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2001): Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. [Fecha de consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_73_esp.pdf

Otras fuentes

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2012) [Fecha de consulta 12 de junio de 2012] Disponible en: www.oas.org/es/cidh/

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2012): Signatarios y estado actual de las ratificaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [Fecha de consulta 20 de junio de 2012]. Disponible en: www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/convratif.asp,

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2011) Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Año: 2012 [Fecha de consulta; 16 de mayo de 2013] Disponible en: www.corteidh.or.cr/index.php/publicaciones#

EL MERCURIO (2012) "Caso Atala", carta al director enviada por Jaime López publicada en su sitio web 21 de Marzo de 2012 [Fecha de consulta 22 de junio de 2012]. Disponible en: <http://blogs.elmercurio.com/columnsycartas/2012/03/21/caso-atala-2.asp>

EL MERCURIO (2012) Tras la resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Gobierno pide a la Suprema que participe en el acto público en reconocimiento a la jueza Atala, en periódico El Mercurio, Nacional, C2 Política, 19 de abril 2012 (online) [Fecha de consulta 22 de junio de 2012] Disponibles en: www.mer.cl/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2012-04-19&dtB=19-04-2012 0:00:00&Paginald=2&bodyid=3

EL MERCURIO (2012) Dos miradas enfrentadas sobre el fallo del caso Atala, periódico El Mercurio, Reportajes, D 6, 25 de marzo 2012 (online) [Fecha de consulta 10 de junio de

2012] Disponible en: www.mer.cl/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2012-03-25&dtB=25-03-2012 0:00:00&Paginald=6&bodyid=10

EL MERCURIO (2012) Parte del dictamen de la CIDH, Ballesteros se reúne con jueza Atala y dice que irá a acto de desagravio, periódico El Mercurio, Nacional C 28, 6 de octubre de 2012 (online) [Fecha de consulta 16 de mayo de 2013] Disponible en: <http://impresa.elmercurio.com/Default.aspx?BodyID=3&dt=2012-10-06>

EMOL (2012) Vocero de la Suprema dice que tribunales deberán considerar fallo de la CIDH en caso Atala, noticia publicada en su sitio web el 21 de marzo de 2012, Santiago. [Fecha de consulta 22 de junio de 2012] Disponible en: www.emol.com/noticias/nacional/2012/03/21/531977/vocero-de-la-suprema-dice-que-tribunales-deberan-considerar-fallo-de-la-cidh-en-caso-atala.html.

EMOL (2012) Defensa de Karen Atala valora fallo de la CIDH: "Marca un antes y un después", noticia publicada en su sitio web, 21 de marzo de 2012, [Fecha de consulta 10 de junio de 2012] Disponible en: www.emol.com/noticias/nacional/2012/03/21/531949/defensa-de-karen-atala-descarta-pedir-tuicion-de-sus-hijas-tras-fallo-de-la-cidh.html

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE (2012), Dirección de Derechos Humanos [Fecha de consulta 20 de junio de 2012] Disponible en: www.minrel.gob.cl/prontus_minrel/site/edic/base/port/derechos_humanos.php

MINISTERIO DE JUSTICIA (2012) Declaración Oficial Ministro de Justicia, Teodoro Ribera Neumann, Caso Karen Atala-Corte Interamericana de Derechos Humanos, Palacio de la Moneda, miércoles 21 de marzo de 2012. [Fecha de Consulta 10 de junio de 2012] Disponible en: www.minjusticia.gob.cl/en/noticias-ministro/806-declaracion-oficial-ministro-de-justicia-por-fallo-corte-interamericana-de-ddhh.html

LA SEGUNDA ONLINE (2012) Estado chileno realiza acto de desagravio a jueza Atala: Movillh lo considera como hecho histórico publicada en su sitio web el 14 de diciembre de 2012. [Fecha de consulta 14 de mayo de 2013]. Disponible en: www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2012/12/806128/Estado-chileno-realiza-acto-de-desagravio-a-jueza-Atala-Movillh-lo-considera-como-hecho-historico

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (2012) [Fecha de consulta 21 de junio de 2012] Disponible en: www.oas.org/es/

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (2012) Departamento de Derecho Internacional, [Fecha de consulta 20 de junio de 2012] Disponible en: www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm

SENADO (2013) Boletín 8202-07, Crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia [Fecha de consulta: 16 de mayo de 2013] Disponible en: www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php#